

no podrá desempeñar la segunda; que en cuanto al Gerente (que el recurrente llama en su escrito Director general, aunque ésta denominación no se emplea en la escritura) le es igualmente aplicable el artículo 75 de la Ley, que no es susceptible de interpretaciones restrictivas, puesto que —unque no es específicamente un órgano social de administración— ejerce la administración como función concedida por el Consejo según se deduce de la cláusula denegada; que la intención del legislador al atribuir a la Junta la facultad omnimoda de destituir a un administrador único o a varios Consejeros, no se basa en que se trate de órganos necesarios de administración, sino en que la Junta no puede tolerar que sus intereses estén en mano de quien los administra mal y estas mismas razones existen para poder destituir a cualquier persona, cualquiera que sea su nombre, que ejerce la administración; que la duración del cargo de Gerente no puede depender nunca exclusivamente del Consejo como se pretende que conste en los Estatutos; y que la facultad de separar a los que administran una Sociedad Anónima es contemplada por la doctrina y la jurisprudencia como no susceptible de limitaciones de clase alguna, y en este sentido se pronuncian las sentencias de 28 de junio de 1934, 31 de diciembre de 1930 y muy recientemente la Resolución de la Dirección General de 13 de marzo de 1974.

Vistos los artículos 11, 75 y 77 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951;

Considerando que en la cláusula sujeta a debate, se ha distinguido tanto por el Notario recurrente como por el funcionario calificador, por exigir un tratamiento diferente, de una parte la cuestión relativa a la separación del cargo de Consejero Delegado, y de otra, la también separación del puesto de Gerente, designados en ambos casos por el Consejo de Administración, por lo que se procederá a su estudio examinando los dos supuestos con independencia;

Considerando que los respectivos informes de las dos partes coinciden en cuanto al punto esencial de que es al Consejo de Administración a quien corresponde retirar la delegación que ha concedido, discrepándose en cuanto a la forma en que se ha redactado la cláusula que para el Registrador no aparece lo suficientemente clarificada, al poder inducir a confusión, y por eso indica «no estamos ante un problema jurídico propiamente dicho; es más, un problema gramatical»;

Considerando que en efecto, una interpretación rigurosamente literal llevaría a afirmar que, en contravención del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, podría el Consejo de Administración, de acuerdo con el texto estatutario, no sólo revocar la delegación efectuada, sino también separar a uno de los miembros del Consejo, dado que se habla de Consejero Delegado abarcando el doble aspecto de administrador y delegación de funciones, ello no obstante, por la sola lectura del artículo 28 de los Estatutos, que se refiere claramente a esta última función, y máxime si se tiene en cuenta que el artículo 22 de los mismos Estatutos reconoce a la Junta general la competencia de separar en cualquier momento a cualquiera de los Consejeros, hay que concluir que en este punto es más adecuado la interpretación contraria, y sin que ello suponga cercenar en nada las facultades de la Junta que como órgano supremo de la Sociedad puede —de acuerdo con el mencionado artículo 75— al separar al Administrador que ostente a la vez una delegación del Consejo, hacerle cesar en esta función, por ser inexcusable para ello, formar parte del mismo;

Considerando en cuanto a la segunda parte de la cláusula, es decir en lo que al Gerente se refiere, es indiscutido que el Consejo que lo nombró está facultado para proceder a su revocación, señalándose en la nota de calificación, que al redactarse en la forma indicada se vulnera el artículo 75 de la Ley, por cuanto queda amputada una de las facultades de la Junta general, —cual es su derecho a separar—, que debe aplicarse no sólo a los Administradores, sino también a quien, sin ser órgano de la Sociedad, ejerza la administración como función conferida por el Consejo de Administración y no por la Junta;

Considerando que al ser el Consejo de Administración a quien corresponde la gestión y representación de la Sociedad, de la que responderá por sus actos ante ella, le incumbe por su propia esencia la organización interna y distribución en su caso de funciones, para lo cual, no sólo está autorizado, siempre que los Estatutos no dispongan otra cosa, para designar la Comisión Ejecutiva o el Consejero Delegado, a que hace referencia el artículo 77 de la Ley, sino también a conferir los apoderamientos que estime necesarios a cualquier persona, y como tal poderdante podrá revocar o no en cualquier momento el poder otorgado, y sin que la Junta pueda hacerlo directamente, por suponer una intromisión en las relaciones internas del Consejo con su apoderado, aunque sí podrá al fiscalizar la gestión social del administrador aprobar o no la actuación seguida, y proceder en consecuencia si lo estima oportuno a su remoción que podría llevar aparejada la del apoderamiento dado,

Esta Dirección General ha acordado revocar la nota del Registrador.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V. S. para su conocimiento, el del recurrente y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.  
Madrid, 8 de febrero de 1975.—El Director general, José Poveda Murcia.

Sr Registrador mercantil de Guadalajara.

## MINISTERIO DE HACIENDA

**4043** *ORDEN de 31 de enero de 1975 por la que se declara la aplicación del principio de reciprocidad en materia de exenciones en imposición directa a las Entidades de navegación aérea residentes de la República del Líbano.*

Ilmo. Sr.: En virtud de lo establecido en los artículos 10, J, 9.º y 5.º 10, de los vigentes textos refundidos de los Impuestos sobre Sociedades, Rentas del Capital y Rendimientos del Trabajo Personal, respectivamente,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se declara a condición de reciprocidad, la exención por el Impuesto sobre Sociedades a las Entidades de Navegación Aérea residentes de la República Libanesa, cuyas aeronaves toquen territorio nacional, aunque tengan en éste consignatarios o agentes.

La exención comprenderá también el Impuesto sobre las Rentas del Capital respecto a los conceptos que figuran en el artículo 9.º del texto refundido de este Impuesto.

Segundo.—Se declara a condición de reciprocidad, la no sujeción al Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal, respecto a las participaciones en beneficios de las Entidades indicadas en el apartado anterior, a que se refiere el artículo 5.º 10, del texto refundido de este Impuesto.

Tercero.—Para la aplicación de lo establecido en esta Orden, la Secretaría General Técnica expedirá el oportuno certificado a favor de las Entidades residentes del mencionado país.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 31 de enero de 1975.

CABELLO DE ALBA Y GRACIA

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

## 4044 BANCO DE ESPAÑA

### Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 24 de febrero de 1975

Divisas convertibles	Cambios	
	Comprador	Vendedor
1 dólar U. S. A. (1)	55,925	56,085
1 dólar canadiense	55,997	56,123
1 franco francés	13,182	13,237
1 libra esterlina	134,488	135,121
1 franco suizo	22,827	22,943
100 francos belgas	162,101	163,066
1 marco alemán	24,241	24,367
100 liras italianas	8,813	8,854
1 florin holandés	23,434	23,555
1 corona sueca	14,206	14,286
1 corona danesa	10,194	10,244
1 corona noruega	11,253	11,310
1 marco finlandés	16,068	16,163
100 chelines austríacos	341,026	344,162
100 escudos portugueses	232,053	234,707
100 yens japoneses	19,503	19,596

(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes países: Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial.

## MINISTERIO DE LA GOBERNACION

**4045** *RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad por la que convoca concurso para la renovación del marchamo sanitario para canales y carnes de aves.*

Próximo a terminar el plazo de vigencia establecido en el apartado e) del punto 2.º de la Resolución de 24 de noviembre de 1966 («Boletín Oficial del Estado» de 14 del mes siguiente),

para el modelo de marchamo que garantiza la sanidad, calidad y origen de las carnes de aves que se expenden en el comercio.

Esta Dirección, oída la Agrupación Sindical, convoca concurso para la elección del marchamo que habrá de utilizarse el próximo período, concurso que se regirá por las siguientes

#### Bases

Primera.—El marchamo habrá de reunir las siguientes características:

Forma: Podrá ser ovalado, circular o de cualquier otra forma con ángulos romos y de imposible recuperación para nuevo empleo.

Tamaño: Indistinto.

Material: El material utilizado habrá de ser resistente, indeleble e inalterable por la acción de la humedad y de la temperatura.

Implantación: Los marchamos habrán de implantarse, en lugar más conveniente, en cada caso, con gran facilidad y rapidez en trabajos en cadena en las canales, en los cierres de las bolsas que contengan canales congeladas y en los envases de sus productos cárnicos.

Leyenda: Una vez implantado el marchamo, deberá leerse en el mismo con toda claridad la designación «Dirección General de Sanidad» o su anagrama o sigla «D. G. S.» y el número registro del matadero o industria elaboradora.

Segunda.—Los concursantes habrán de ser fabricantes, extremo que justificarán con la Licencia Fiscal, última, etc. Además acreditarán la capacidad máxima de producción anual del modelo o modelos presentados y el momento a partir del cual pueden comenzar a servirlos, forma de entrega, distribución y embalajes. Igualmente figurará en sus proposiciones el precio por unidad del marchamo; como igualmente el precio de la máquina implantadora del mismo.

Tercera.—En este concurso se adoptarán los siguientes tipos de marchamos:

a) Marchamo a colocar en canales de aves.

b) Marchamo a colocar en envases (bolsas, bandejas, etc.) que contengan canales congeladas, o partes de las mismas fileteadas, troceadas o picadas.

Las instancias, acompañadas del modelo del marchamo, se presentarán en el Registro de la Dirección General de Sanidad, calle Ventura Rodríguez, número 7, o en aquellas otras dependencias autorizadas por la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente convocatoria.

Cuarta.—Para la elección de los marchamos más idóneos, la Subdirección General de Sanidad Veterinaria dispondrá la realización de cuantas pruebas funcionales o de otro orden considere necesarias. Los concursantes podrán asistir a las mismas, a cuyo efecto se les comunicará oportunamente la fecha en que las citadas pruebas han de tener lugar.

Quinta.—Elegidos inicialmente los marchamos más convenientes, con asistencia del representante de la Agrupación Sindical específica, la Dirección General de Sanidad comprobará la capacidad económica e industrial de la Empresa que los haya presentado, a la vista de ellas, del precio propuesto y de las demás condiciones previstas en la base primera, se otorgará la correspondiente concesión de suministro, sometiéndose a las siguientes condiciones:

I. Los marchamos que se suministren habrán de responder a las mismas características que las de los modelos que resulten elegidos en el presente concurso.

II. El fabricante del o de los marchamos elegidos queda obligado a fabricarlo sólo y exclusivamente para el uso que determine la Dirección General de Sanidad.

III. La fecha a partir de la cual comience la obligación de suministrar los nuevos marchamos será fijada por la Dirección General de Sanidad, a propuesta de la Subdirección General de Sanidad Veterinaria.

IV. La autorización caducará a los cuatro años, pudiendo prorrogarse por un año más. Transcurrido dicho plazo expirará la validez de la autorización, debiendo procederse antes de dicho término a la convocatoria de nuevo concurso.

V. Durante el período de vigencia de la autorización, la Dirección General de Sanidad, podrá, bien de oficio o a petición de la parte interesada, fijar nuevos precios por unidad de marchamos y ejercerá las potestades de inspección y vigilancia necesarias para el cumplimiento de las condiciones de la autorización.

Sexta.—La Agrupación Sindical específica se encargará de la distribución de los marchamos correspondientes a las actividades de sus afiliados, mediante petición escrita avalada por el Veterinario oficial de la industria. Con el fin de asegurar la iniciación y continuidad en la imposición de los marchamos, la industria o industrias que resulten autorizadas constituirán en la Agrupación Sindical una reserva de aquéllos en la cuantía que fije la Dirección General de Sanidad, reserva que podrá ser adaptada anualmente a las necesidades previstas para el siguiente período de tiempo.

El suministro de marchamos se efectuará sin demora ni interrupción conforme a los pedidos que formule la Agrupación Sindical interesada, cuyo importe será abonado por ésta al concesionario dentro de los treinta días desde la fecha de servido el pedido.

La normativa para la entrega, distribución y control de pedidos será redactada, una vez fallado el concurso, por acuerdo entre la Agrupación Sindical y el concesionario, con la aprobación de la Subdirección General de Sanidad Veterinaria.

Séptima.—Las Empresas que resulten autorizadas constituirán una fianza de 2.000.000 de pesetas. A efectos de un suministro normal, podrán auxiliarse de otras que contribuyan a la fabricación de los marchamos, en todo caso sólo las titulares de la concesión serán responsables ante la Dirección General de Sanidad del cumplimiento de las condiciones expuestas en las respectivas autorizaciones.

Octava.—La Dirección General designará un Veterinario oficial que controlará en todo momento la correcta distribución de los marchamos por las Agrupaciones Sindicales correspondientes. A los titulares Veterinarios oficiales de las industrias correspondientes la observancia estricta de las normas que sobre marchamado disponga la Subdirección General de Sanidad Veterinaria.

Transitoria.—Hasta tanto quede resuelto el concurso que se convoca, se prorroga el plazo de implantación del actual marchamo, cuya duración quedará fijada en el acuerdo que se menciona en la base sexta de esta Resolución.

Madrid, 23 de enero de 1975.—El Director general, Federico Bravo Morate.

4046

RESOLUCION del Gobierno Civil de Salamanca por la que se declara la necesidad de ocupación de las fincas que se citan.

Visto el expediente que se instruye por la Dirección General de Bellas Artes, sobre expropiación forzosa de terrenos declarados de utilidad pública por Decreto 2143/1974, de 20 de julio, para llevar a cabo la revalorización y conservación de la muralla de Salamanca y de la llamada «Cueva de Salamanca»; y

Resultando que han sido cumplimentados los trámites de información pública, mediante anuncios insertos en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia, diario «El Adelanto» y tablón de edictos del Ayuntamiento de esta capital;

Resultando que durante el plazo de información pública han presentado los propietarios y arrendatarios afectados por la expropiación, las alegaciones y documentos que han estimado conveniente, así como también ha sido informado todo ello por la Abogacía del Estado, conforme se dispone en el artículo 19 del Reglamento para aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, que lo hace en sentido favorable a la declaración de necesidad de ocupación de las fincas de que se trata;

Vistos la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento para su aplicación de 26 de abril de 1957;

Considerando que el trámite siguiente a efectuar, de conformidad con el artículo 20 de la citada Ley de Expropiación Forzosa, consiste en que sea acordada por mi autoridad la necesidad de ocupación de los bienes afectados,

He resuelto acordar la necesidad de ocupación de los siguientes inmuebles:

Finca sita en el número 11 del paseo del Rector Esperabé, propiedad de doña Aurea Peña Alfonso.

Son inquilinos: Don Tomás Hernández de la Iglesia, don José Romero Hernández, don Angel Iñigo Tejedor, don José Sánchez Andrés y don Luis Pérez García.

Fincas sitas en los números 13, 15 y 17 del paseo del Rector Esperabé, propiedad de don Carlos Peña de Pablo (no comparece).

Finca sita en el número 19 del paseo del Rector Esperabé, propietarios, por terceras partes, don Julián Sánchez Núñez, don Angel González Rivero y los hermanos Jesús, Esteban y Consuelo Sánchez Pérez.

Son arrendatarios de las viviendas y locales de dicho inmueble: Don Amador González Salvador (que no comparece en el expediente), don Abundio Iglesias Pampliega (taller mecánico), don Valentín Iglesias Pampliega (vivienda y bar) y don Agustín Santo Domingo Rengel Corrés (café-bar).

Finca sita en el número 58 de la calle de San Pablo, propietario de dos terceras partes don Manuel Boyero García y de la tercera parte restante y por mitad don Juan y doña Filomena Hoyos González, totalmente desocupada.

Finca sita en los números 60-62 de la calle de San Pablo, conocida con el nombre de La Concordia, propiedad de doña María Luisa García Ballester.

Son arrendatarios doña Rosa Gómez Rodríguez (industria de hospedaje), don Antonio Sánchez, don Agustín Montejo Martín y don Fernando Núñez Colodrón.

Finca sita en el número 64 de la calle de San Pablo, propiedad de doña Ninfa Galán Blanco.